

basco que negó el amparo á Juan Ramon: y se declara, que la Justicia de la Union lo ampara y protege contra el acto del C. Gobernador del Estado por el cual se le consignó por cinco años, el 4 de Marzo del año próximo pasado, al servicio de las compañías fijas de la plaza de Tabasco.

Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito mencionado, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron. — (Firmados.) — *S. Lerdo de Tejada.* — *P. Ogazon.* — *Juan J. de la Garza.* — *J. M. Lafragua.* — *P. Ordaz.* — *Ignacio Ramirez.* — *J. M. del Castillo Velasco.* — *M. Auza.* — *S. Guzman.* — *M. Zavala.* — *J. G. Ramirez.* — *L. Guzman.* — *Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y uno. — *Agustín Peralta,* oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Antonio Rodriguez contra el C. Gobernador del Estado de Puebla, por haber sido destinado al servicio de las armas en el primer Batallon de Cazadores Guardia Nacional.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal, cree muy conveniente, que recursos de la competencia del presente no deban admitirse sin direccion de letrado, pues no es fácil que el vulgo tenga conocimiento de las leyes, é importaria la mas grave injusticia la disposicion del ar-

tículo 16 de la ley de 20 de Enero de 1869, tratándose de un recurso improduyente, admitido sin aquel requisito.

Pero ya que el Juzgado por equidad ha dado entrada al juicio, nada mas sencillo que fundarlo en la ley, pues patente y clara es la violacion de una garantía individual en el caso, por mas que en el ocurso no se haya determinado con la precision debida.

El ciudadano Antonio Rodriguez, jamas dió su consentimiento para prestar sus servicios en la carrera de las armas, y si en virtud de una ley anticonstitucional y extraordinaria pudo imponérsele tan dura obligacion, quedó libre de los efectos de esa ley desde el momento en que la autoridad le concedió su licencia absoluta.

Libre ya como estaba, su retencion en el cuartel no pudo tener mas carácter que el de pena, ó es una violacion de la garantía que otorga el artículo 59 constitucional; pero la pena debe ser el resultado de un juicio, y sobre que aquí no lo ha habido, el servicio de las armas no puede imponerse con ese carácter, ni está comprendido como tal entre las diversas que nuestras leyes penales enumeran.

Es pues, simplemente una arbitrariedad que se comete so pretexto de una deuda civil, si es que tal deuda existe. Si Rodriguez extravió el fusil y vestuario, el derecho da accion contra él para recobrar el valor de los efectos, ó puede exigírsele la devolucion y paga como condicion previa á su libertad; y se podrá usar de otros medios que no sea el bárbaro de la prision por deudas, (cosa que con razon prohíbe el artículo 17 de la Constitucion, y constituye una garantía individual de las mas respetables.) Podria añadirse sin temor de errar, que tal deuda no existe, no solo por lo que expone la esposa del agraviado, sino porque las cantidades que se adeudan á éste por sueldos, han de superar con mucho exceso á la pequeña suma de que se lo pretende hacer responsable; pero aun cuando así no fuera, y aun cuando hubiera extraviado tres

uniformes completos y nuevos, siempre sería una odiosa injusticia la que se hace, y una irrisión á la primera de nuestras leyes, que no debe dejarse pasar desapercibida.

Hé aquí los hechos en su mas simple expresion:

Rodríguez fué destinado al servicio de las armas, en virtud de una ley que despojaba al hombre de los mas sagrados derechos que la naturaleza le concede, y nuestra Constitución sanciona: por motivos justos ó sin ellos, se le eximió de las consecuencias de esa ley y se le devolvió la libertad de que nunca debió privarse; y hoy, á pretexto de que es deudor de una pequeña cantidad, que de seguro, no debe por las razones antes expuestas, se le quiere y se le priva de hecho de esa libertad, imponiéndole prestación de servicios forzosos, y aun podría añadirse *gratuitos*, como generalmente sucede con los empleados todos de este Estado.

Que con tal procedimiento se infringe la garantía mencionada; que el recurso está fundado en el artículo 1º de la ley de 20 de Enero de 69 ya citada, y que debe amparar la Federación á Antonio Rodríguez, en cumplimiento de esta ley y por infracción del artículo 5º constitucional, son consecuencias que no me toca ponderar, cuando es tan conocida la ilustración y tan justificada la autoridad á quien me dirijo.

Espero por lo mismo, con sobrada razón, que fallará de conformidad á este pedimento.

Zaragoza, Diciembre veintinueve de mil ochocientos setenta. — (Firmado.) — *Eugenio Sanchez.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Puebla, Enero cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por el soldado ciudadano Antonio Rodríguez, contra el ciudadano Gobernador del Estado, por haber mandado suspender los efectos del

acuerdo en que le concedió que fuera dado de baja; el escrito del quejoso; lo contestado por la autoridad responsable, en virtud del informe que se le pidió; el parecer fiscal, y cuanto mas que ha debido verse y tenerse presente. Considerando: que aunque el promovente al solicitar el amparo, solo ha referido, que estando de soldado en el primer batallón de Guardia Nacional y habiendo conseguido su baja, con motivo de haber manifestado el coronel que cuando desertó se llevó consigo el vestuario y el rifle, quedara sin efecto la orden del Gobierno, siendo falso que hubiera llevádose lo que se dice, pues el vestido de lienzo, de medio uso que le fué dado, lo tenia pagado con el descuento de cinco pesos que se le habia hecho; sin expresar el artículo ó artículos de la Constitución que han infringido en su perjuicio, en cumplimiento del artículo 4º de la ley de 20 de Enero de 1869: como por parte del Ministerio fiscal se ha apoyado la pretencion, invocándose al objeto el 5º y 17 de ella, resulta llenado ese requisito; que en lo expuesto por el Ejecutivo del Estado, aparece que Rodríguez fué consignado al servicio de las armas por el Cefe político de Atlixco, en Mayo del año próximo anterior, estando en suspenso la garantía que concede el artículo 5º constitucional, y el Gobierno, usando de la facultad que da la ley de 15 de Enero del expresado año, por autorizacion del ciudadano Presidente, lo destinó al primer Batallón de la Guardia Nacional de la capital del Estado; así como tambien consta que en 14 de Diciembre último, á instancia del quejoso, se acordó su baja librándose la orden al coronel; pero como éste hiciera presente las circunstancias que concurrían en Rodríguez de la desercion y de llevarse el fusil y vestuario, por esta causa se ordenó que se suspendieran los efectos del acuerdo, hasta tanto no indemnizara Rodríguez al Estado de la pérdida sufrida por esos objetos; que es visto por lo tanto, que solo se ha atendido en el reo la responsabilidad civil, supuesto que para

que se lleve adelante el acuerdo en que se le ha concedido su baja, se le pone por condicion el que pague el importe del fusil y vestuario; que esta determinacion gubernativa peca contra el tenor del artículo 17 de la Constitucion federal, una vez que se le priva de su libertad hasta tanto no satisfaga la deuda; con la circunstancia de la falta de competencia en la autoridad, y sin forma de juicio; no menos que contra el 5º al obligarlo á trabajar sin su consentimiento; por cuyas consideraciones y de conformidad al pedimento fiscal, se declara: que la Justicia federal ampara y protege al soldado del primer Batallon de la Guardia Nacional, ciudadano Antonio Rodriguez contra lo ordenado por el ciudadano Gobernador del Estado respecto de que no sea dado de baja mientras no pague el fusil y vestuario de que se le supone deudor.

Hágase saber á quienes corresponda; publíquese por los periódicos lo resuelto y remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revision, en cumplimiento de los artículos 13 y 17 de la ley de 20 de Enero de 1869. El ciudadano Juez de Distrito definitivamente juzgando lo proveyó, mandó y firmó.—(Firmado.)—*Antonio Rivero.*—Ante mí, *Antonio G. Mosqueira.*

*Ejecutoria de la Suprema Corte
de Justicia.*

México, Febrero diez de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido por Jacoba Ruiz, á nombre de su esposo Antonio Rodriguez, ante el Juzgado de Distrito de Puebla, contra el Gobernador del Estado, por haber éste mandado suspender los efectos del acuerdo en que se dispuso que el quejoso fuera dado de baja en el cuerpo de Guardia Nacional en que estaba sirviendo; y considerando: que en las constancias del expediente aparece que, acordada la baja de Rodriguez, el coronel del cuerpo in-

formó que el quejoso había desertado, llevándose el fusil y el vestuario, y que por esto se dispuso se suspendieran los efectos de la Orden mientras Rodriguez no indemnizara al Estado de las pérdidas que le originó, llevándose al desertar las prendas referidas; cuya disposicion viola las garantías á que se refieren los artículos 15 y 17 de la Constitucion federal; por lo expuesto, y en virtud de lo que proviene la misma Constitucion en el artículo 101, se declara: que se confirma la sentencia pronunciada el 4 de Enero próximo pasado por el Juzgado de Distrito de Puebla, que dispone, que la Justicia de la Union ampara y protege al soldado del primer Batallon de Guardia Nacional ciudadano Antonio Rodriguez, contra lo ordenado por el ciudadano Gobernador del Estado, respecto de que no sea dado de baja, mientras no pague el fusil y vestuario de que se le supone deudor.

Devuélvanse sus actuaciones al Juez de Distrito de Puebla, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal Pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Lerdo de Tejada.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafra-
gua.*—*P. Orjaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*M. Zavala.*—*José García Ra-
mirez.*—*Leon Guzman.*—*Luis M. Aguilar,* secretario.

Son copias. México, Febrero diez y seis de mil ochocientos setenta y uno,—*Agustin Peralta,* oficial mayor.